

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA DE DECISIÓN LABORAL

AUDIENCIA DE TRÁMITE Y FALLO

El veintinueve (29) de abril de dos mil veintiuno (2021), la SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL del TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, se constituyó en audiencia, con el fin de resolver el recurso de apelación y consulta de la sentencia proferida en primera instancia en el presente proceso ordinario laboral promovido por **ARGEMIRO ECHAVARRÍA LÓPEZ** contra la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES** (en adelante COLPENSIONES), tramitado bajo el radicado No. **05001-31-05-016-2017-00487-01**.

El Magistrado del conocimiento, Dr. FRANCISCO ARANGO TORRES, declaró abierto el acto y previa deliberación sobre el asunto, la Sala adoptó el proyecto presentado por el ponente, el cual quedó concebido en los siguientes términos:

1. ANTECEDENTES

A través de la presente acción judicial, el demandante pretende se condene a COLPENSIONES a reconocerle y pagarle pensión especial de vejez de alto riesgo con los intereses moratorios del artículo 141 de la ley 100 de 1993 y la indexación.

Como fundamentos de hecho de sus pretensiones, relata el actor que nació el 3 de enero de 1957. Que laboró al servicio del Minera las Brisas S.A., desde el 2 de diciembre de 1983 hasta el 12 de enero de 1999 en el cargo de operador de maquinaria pesada, empresa que se dedicaba a la explotación de asbesto.

Señala que acredita como cotizado al sistema general de pensiones 785,57 semanas por actividad de alto riesgo.

Que nació el 3 de enero de 1957 y que para el 2 de junio de 2015 que contaba con más de 55 años, le solicitó a Colpensiones el reconocimiento de la pensión especial de vejez de alto riesgo, la que le fue negada mediante resolución GNR 357409 del 12 de noviembre de 2015 aduciéndose que no se habían realizado por el empleador cotizaciones por alto riesgo.

Señala que en el proceso de liquidación de la empresa, se puso al día en el pago de los aportes a seguridad social.

2. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA.

El *a quo* despachó de manera favorable las pretensiones de la demanda, condenando a COLPENSIONES pagar al actor pensión especial de vejez de alto riesgo desde el 1º de octubre de 2017 y a reconocer el retroactivo pensional causado desde esta fecha y hasta el 30 de marzo de 2019, en la suma de \$15.590.645 y la indexación de las condenas.

Para fulminar la condena adujo básicamente el juez de primera instancia, que en materia de pensión de vejez de alto riesgo no tiene incidencia que el empleador no hubiese efectuado las cotizaciones adicionales, por lo que, si se cumplen con demostrar el desempeño del trabajador en este tipo de actividades, así como los requisitos exigidos por la noma debe accederse a la prestación pensional.

Explicó que en este caso se demostró con la prueba testimonial la exposición del actor a una actividad de alto riesgo, así como que cumple los requisitos del decreto 2090 de 2003, pues para 1º de octubre de 2017 el actor tenía 60 años de edad y 760 semanas de cotización especial las que cumplió desde el año 1999.

Señaló que si bien la pensión se causa a por el cumplimiento de los requisitos solo a partir del momento en que se pidió se reconoce, fecha que coincide con la última cotización, razón por la cual no se reconoce desde noviembre de 2015 pues el demandante continuó cotizando y además si lo hubiera pedido antes, las semanas superiores solo le darían derecho a un año de descuento.

La pensión fue otorgada en el monto del salario mínimo legal y en el número de 13 mesadas pensionales al año.

Consideró además la juez, que no había lugar a los intereses moratorios del artículo 141 de la ley 100 de 1993, pues la prestación pensional se reconoce aplicando una posición jurisprudencial y Colpensiones negó el derecho amparo en la ley, por lo que en lugar de los intereses ordenó la indexación de las condenas.

Finalmente, la juez declaró no probada la excepción de prescripción.

3. DEL RECURSO DE APELACIÓN.

La sentencia fue apelada por el apoderado del DEMANDANTE, argumentando que para el disfrute de la pensión no puede exigírsele al afiliado que cese su vinculación al sistema o que no tenga ninguna vinculación laboral cuando COLPENSIONES ha negado el derecho a pensionarse

Que el demandante para el 1º de noviembre 2015 acreditaba más de 1300 semanas de cotización, pues tenía 1308, lo que genera el derecho a pensionarse a partir de esa fecha, que corresponde al mes en que se le negó su pensión con ello induciéndolo al error.

Por su parte la apoderada de COLPENSIONES apeló la sentencia aduciendo que el artículo 2 del Decreto 2090 de 2003 estableció taxativamente las actividades que son consideradas de alto riesgo, y no todos los trabajadores de una empresa catalogada de alto riesgo tiene como consecuencia que sus trabajadores también lo sean pues pueden desarrollar algunas labores que no lo impliquen.

Señala que revisadas las pruebas recaudas no es posible determinar en qué periodos el actor desarrolló actividades de alto riesgo para que le sea aplicable el régimen del Decreto 2090 de 2003 por lo que solicita se revoque la sentencia de primera instancia.

4. DE LAS ALEGACIONES EN SEGUNDA INSTANCIA.

Corrido el traslado para alegar en esta instancia, los apoderados judiciales de la parte DEMANDANTE y de COLPENSIONES presentaron oportunamente escrito de alegaciones en los siguientes términos:

ALEGATOS DE COLPENSIONES.

COLPENSIONES argumenta resumidamente en los alegatos, que solicita al NO acoger la sentencia proferida por el juzgado 16 laboral del circuito de Medellín el 3 de abril de 2019, en donde se declaró la existencia del derecho al demandante, pues este pretende el reconocimiento de la pensión especial de vejez por actividades de alto riesgo, teniendo en cuenta su vinculación laboral con Minera Las Brisas y el artículo 2 del Decreto 2090 de 2003, precisó taxativamente como actividades de alto riesgo entre ellas:

1. Trabajos en minería que impliquen prestar el servicio en socavones o en subterráneos.
2. Trabajos con exposición a sustancias comprobadamente cancerígenas.

Pero, importante aclarar que no a todos los trabajadores de una empresa catalogada como de alto riesgo le son aplicables los presupuestos del Decreto 2090 de 2003, en cuanto a que no todos desarrollan este tipo de actividades. La anterior premisa ha sido ratificada por Corte Suprema de Justicia – Sala Laboral, mediante Sentencia de Radicación No. 43429 del 25 de mayo de 2016, pues allí se expresó:

“No por el hecho de que una empresa sea clasificada como de alto o máximo riesgo, se puede predicar que todos sus trabajadores despliegan actividades de este tipo, pues se trata de dos conceptos con tratamientos y consecuencias diferentes. En ese sentido, nada impide que una empresa sea catalogada como de alto riesgo y que, al mismo tiempo, mantenga trabajadores que despliegan labores alejadas del alto riesgo para la salud.”

En tal sentido, resulta indispensable al momento de solicitar el reconocimiento de una pensión especial de alto riesgo que sea allegado, además del certificado de la ARL en qué se precise la categorización de la empresa, el certificado laboral de todos los empleadores con los cuales se hubieran desempeñado actividades de alto riesgo, detallando:

1. La actividad de alto riesgo desempeñada.
2. Funciones desarrolladas durante el tiempo laborado (historia ocupacional).
3. El tiempo durante el cual se desempeñó la actividad de alto riesgo.
4. Detalle de los periodos durante los cuales se efectuaron las cotizaciones especiales adicionales.

En síntesis, dicha documentación es la que le permite a Colpensiones determinar si a un afiliado le es o no aplicable los postulados del Decreto 2090 de 2003.

Por consiguiente, es necesario traer a colación que el artículo 167 del Código General del Proceso, a cerca de la carga de la prueba, esgrimió:

“ARTÍCULO 167. CARGA DE LA PRUEBA. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.”

Revisado el material probatorio anexado a la demanda, junto con el expediente laboral del demandante, se evidencia que no es posible determinar con exactitud los periodos de tiempo específicos en los cuales el demandante desempeñó actividades de alto riesgo, durante su vinculación con MINERA LAS BRISAS S.A.

ALEGATOS DEL DEMANDANTE.

El apoderado del actor argumenta resumidamente en los alegatos, que no existe duda en el presente caso, que el demandante desempeñó en la empresa MINERA LAS BRISAS S.A, ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD por estar en continuada exposición a material particulado de asbesto entre el 2 de diciembre de 1983 y el 12 de enero de 1999, de lo cual existe suficiente material probatorio documental y testimonial.

MINERA LAS BRISAS afilió al trabajador al Sistema General de pensiones el 2 de diciembre de 1983; por lo que acreditó al sistema de pensiones 785,57 semanas cotizadas por alto riesgo, teniendo en cuenta que su contrato laboral finalizó el 12 de enero de 1999; véase:

	DESDE	HASTA	TOTAL, DIAS
1	02/12/1983	31-12-94	4047
2	01/01/1995	31-12-95	360
3	01-01-96	31-12-96	360
4	01-01-97	31-12-97	360
5	01-01-98	31-12-98	360
6	01/01/1999	12/01/1999	360
			5499

El demandante nació el día 3 de enero de 1957 y, para la fecha en que realizó la reclamación administrativa de PENSIÓN ESPECIAL DE VEJEZ

POR ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD dispuesta en el Decreto 2090 de 2003 (2 de junio de 2015) contaba con más de 55 años y las semanas de cotización necesarias para causar y disfrutar de su derecho. A la anterior solicitud se le dio respuesta negativa a través de la Resolución GNR 357409 del 12 de noviembre de 2015, bajo el argumento que **según el reporte de semanas cotizadas expedido por la Gerencia Nacional de Historia Laboral y Nómina de Pensionados el afiliado acreditaba un total de 1304 semanas cotizadas; y que el empleador MINERA LAS BRISAS no realizó las cotizaciones por alto riesgo.**

1. SOBRE LA EXIGENCIA DE RETIRARSE DEL SISTEMA DE PENSIONES AL MOMENTO DE LA RECLAMACIÓN DE LA PRESTACIÓN y LA ACREDITACIÓN DE SEMANAS DE COTIZACIÓN

No se puede exigir al demandante, ni a ningún afiliado que cese en sus cotizaciones al Sistema General de Pensiones o que no tenga ningún tipo de vínculo laboral tratándose de una persona a quien Colpensiones le ha dicho que no tenía derecho a su pensión especial por alto riesgo. En este sentido y siguiendo los lineamientos de la sentencia de la CSJ cuya radicación es la 31408 del 6 de febrero de 2008 y la sentencia con Radicación N. 47236 del 6 de abril de 2016 y cuya Magistrada ponente fue la Dra. CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO donde señaló:

... en tratándose de eventos en los que el afiliado ha sido conminado a seguir cotizando en virtud de la conducta renuente de la entidad de seguridad social a reconocer la pensión, que ha sido solicitada en tiempo, la Corte ha estimado que la prestación debe reconocerse desde la fecha en que se han completado los requisitos (CSJ SL, 1º sep. 2009, rad. 34514; CSJ SL, 22 feb. 2011, rad. 39391; CSJ SL, 22 feb. 2011, rad. 39391; CSJ SL, 6 jul. 2011, rad. 38558; CSJ SL, 15 mayo. 2012, rad. 37798

El demandante le expresó su voluntad de pensionarse a Colpensiones realizando la reclamación de la prestación, lo que le genera el derecho a causar y adquirir su derecho a pensionarse a partir del 1 de noviembre de 2015 que corresponde al mes en que se le negó su prestación resaltando que las cotizaciones realizadas después de la expedición de la Resolución GNR 357409 del 12 de noviembre de 2015 no conllevan al incremento del IBL de la pensión por estar aportando sobre el salario mínimo legal.

Al respecto me permito hacer alusión a la sentencia SL13008 -2017 de agosto 23 de 2017 de nuestra CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - SALA DE CASACIÓN LABORAL y cuyo magistrado ponente fue el Dr. **Ernesto Forero Vargas**.

Enseguida el apoderado del actor transcribe en extenso la sentencia antes referida y continúa anotando que manera posterior y, bajo estos mismos lineamientos la misma corporación se pronunció en la sentencia SL 4913 -2019/ 61590 denoviembre 13 de 2019, cuyo Magistrado Ponente fue el Dr. Martín Emilio Beltrán Quintero.

“... Entonces, si bien la regla general sigue siendo la desvinculación del sistema como requisito necesario para el disfrute de la pensión, existen situaciones especiales que ameritan reflexiones igualmente particulares y que deben ser advertidas por los jueces en el ejercicio de su labor de administrar justicia, sin que ello comporte una “transgresión a las reglas metodológicas de interpretación jurídica” (CSJ SL5603 -2016).

Así las cosas, sin perjuicio de que el retiro del sistema sea una condición necesaria para el disfrute de la pensión, en la práctica esa voluntad puede manifestarse de diversas maneras, como cuando se suspenden definitivamente los aportes o cuando se solicita el reconocimiento pensional, y no únicamente con la prueba formal de la novedad de retiro...”

En concordancia con lo anterior es que solicito respetuosamente al Tribunal Superior de Medellín – Sala Laboral acceder a las pretensiones de la demanda en el sentido de condenar a reconocer y pagar a mi representado la pensión desde el momento en que causo y adquirió el derecho, es decir desde el 1 de noviembre de 2015 y los intereses moratorios contemplados en la ley 100 de 1.993 por el no pago oportuno de la prestación desde el momento de causación del derecho y hasta el momento de su pago total por parte COLPENSIONES.

5. PROBLEMA JURÍDICO PARA RESOLVER

El problema jurídico para resolver se circunscribe a establecer si el actor cumple con los requisitos exigidos por el Decreto 2090 de 2003, para acceder a la pensión especial de vejez, así como si de tener derecho el demandante a la pensión, se le debe pagar en las condiciones dispuesta por el *a quo*, o desde la fecha planteada en el recurso de apelación del actor.

Tramitado el proceso en legal forma y por ser competente esta Corporación Judicial para conocer de la apelación y consulta de la sentencia de primera instancia, conforme a lo dispuesto en el art. 10 y 14 de la Ley 1149 de 2007, se pasa a resolver, previas las siguientes,

6. CONSIDERACIONES

De conformidad con lo dispuesto el art. 14 de la Ley 1149 de 2007, además de resolverse la apelación de las partes, se consultará la sentencia en favor de COLPENSIONES por haberle resultado adversa, por lo que la legalidad del fallo será estudiada en su integridad.

Para resolver tanto el recurso de apelación, como la consulta en favor de Colpensiones, es necesario manifestar que, el Decreto 2090 de 2003 con base en el cual el *a quo* condenó al pago de la pensión, en esencia establece que las personas laboren en las actividades de alto riesgo que menciona el decreto y coticen al menos 700 semanas especiales, al reunir la densidad de semanas cotizadas que establece el Sistema General de Seguridad Social en Pensiones de la ley 100 de 1993 con las reformas de la Ley 797 de 2003, tienen el derecho a pensionarse a la edad de 55 años, pudiendo por cada 60 semanas adicionales de cotización especial, a las mínimas requeridas rebajar en un año la edad sin que pueda ser inferior a los 50 años.

En relación con lo anterior, con el registro civil de nacimiento del demandante que obra a folio 11 del expediente se prueba que este nació el **3 de enero de 1957**, por lo que los 55 años de edad, los cumplió este mismo día y mes del año 2012.

Respecto del tiempo que tuvo en cuenta el *a quo* al actor como laborado en actividad de alto riesgo expuesto al asbesto, considera la Sala, que en efecto acorde a la prueba documental obrante a folios 25 a 30 y los testimonios rendidos por JESÚS HUMBERTO PELÁEZ y ROMÁN ALBEIRO PÉREZ CORRALES que se encuentran grabados en el CD de folio 133, el demandante trabajó en MINERA LAS BRISAS expuesto al asbesto que es considerado material comprobadamente cancerígeno, conforme la amplia literatura de la Organización Mundial de la Salud.

Conforme los testimonios rendidos, el demandante siempre trabajó en la cantera de extracción de asbesto pues conducía maquinaria pesada que transportaba el material,

es decir tenía un contacto directo con el asbesto. Pero es más, no solo los trabajadores de la industria de asbesto sino incluso la comunidad que reside cerca de las zonas de explotación de dicho material se ven expuestos al mismo por ser un material que se esparce fácilmente por el viento. Por lo tanto, no le asiste razón a la apoderada de Colpensiones en el recurso de apelación al señalar que, aunque la empresa estuviese catalogada en riesgo 5 por la ARL ello no daba a entender que el trabajador desempeñara una labor de alto riesgo, pues en este caso está demostrado que sí la ejercía y que prestaba sus servicios directamente en la mina en el municipio de Campamento- Antioquia como lo expusieron los testigos, estando permanentemente expuesto al asbesto.

Lo anterior lo corrobora la resolución 748 de 1997 emitida por el ISS clasificando con grado de riesgo 80, código de riesgo 5335010 al personal que labora en todos los sectores de la mina de la empresa Minera las Brisas S.A. (fl. 28 y 29), y del comunicado del 27 de octubre de 2003 dirigido por el ISS a la empresa Minera las Brisas S.A., del que se deduce que en la planta de producción de minería a campo abierto, para el normal desarrollo de las tareas las personas deben transitar por lugares con altas concentraciones de asbesto en el ambiente, estando expuestas a este factor de riesgo y deben cotizar por alto riesgo, (fl.30).

Ahora, en lo concerniente al tiempo cotizado por el demandante a Minera Las Brisas, expuesto al asbesto, se observa en la historia laboral de folio 88 a 89, que se le anota un tiempo de cotización entre el 2 de diciembre de 1983 hasta el 31 de diciembre de 1994, sin embargo en este mismo tiempo se anotan cotizaciones con MIRO SEGURIDAD LTD entre el 12 de junio de 1992 y el 26 de agosto de 1993, sin embargo se le termina reconociendo al actor como semanas cotizadas por Minera las Brisas 526,58 semanas

Entre el 1 de enero de 1995 al 12 de enero de 1999, el actor registra con Minera las Brisas, 207,42 semanas.

De esta manera, el actor registra con Minera las Brisas, cotizaciones en trabajo de alto riesgo que establecen los Decretos 1900 de 1983, 758 de 1990, 1281 de 1994 y 2090 de 2003, un total de 734 semanas, las que son suficientes para reconocerle la pensión con base en este último decreto con el que la *a quo* otorgó dicha prestación, pues él exige al menos 700 semanas cotizadas en trabajo en actividad de alto riesgo.

Se advierte que como quiera que antes del Decreto 1281 de 1994, la disposiciones legales que regulaba la pensión especial de vejez por trabajo de alto riesgo otorgaba dicha prestación en consideración a este tipo de trabajo, sin que se exigiera algún tipo de cotización especial, conforme ya lo ha decantado la jurisprudencia de la SCL de la Corte Suprema de Justicia, el tiempo laborado durante la vigencia de los Decretos 1900 de 1983 y 758 de 1990, en las actividades de alto riesgo que ellos mencionan deben ser tenidos en cuenta para contabilizarse como cotizaciones especiales.

Igualmente en lo concerniente a las cotizaciones posteriores a la expedición del Decreto 1281 de 1994, que no se hayan realizado con el porcentaje adicional que este decreto y posteriormente el decreto 2090 de 2003 establecen, conforme a la jurisprudencia de SCL de la H. Corte Suprema de Justicia, deben ser tenidas en cuenta como cotizaciones de trabajo de alto riesgo, por cuanto la afiliación a este tipo de actividades protegen tal riesgo, por lo que a pesar que el ISS hoy COLPENSIONES haya omitido cobrar las cotizaciones o el porcentaje adicional, ello no puede perjudicar al trabajador en el reconocimiento de la prestación a que tenga derecho.

En razón a lo anterior, se confirmará la sentencia en cuanto le otorgó al demandante la pensión pluricitada.

Se pasa ahora a decidir sobre la fecha de causación y disfrute de la pensión del demandante, asunto apelado por la apoderada del actor.

Para abordar el estudio del tema del disfrute de la pensión de vejez, es necesario tener en cuenta que la Ley 100 de 1993, consagra en el inciso 2º del artículo 31, que al Régimen de Prima Media con Prestación Definida le *“Serán aplicables las disposiciones vigentes para los seguros de invalidez, vejez y muerte a cargo del Instituto de Seguros Sociales, con las adiciones, modificaciones y excepciones contenidas en la citada ley.”*, de tal manera que como el derecho pensional del actor le es reconocido en el régimen pensional de prima media, por ello que le son aplicables las disposiciones vigentes para los seguros de IVM a cargo del I.S.S., en lo que concierne a la causación y disfrute de la pensión, pues la ley 100, no trajo disposición que regulara o modificara este aspecto y es de esta manera que el artículo 13 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990, estipula literalmente que:

“La pensión de vejez se reconocerá a solicitud de parte interesada reunidos los requisitos mínimos establecidos en el artículo anterior, pero será necesaria su desafiliación al régimen para que se pueda entrar a disfrutar de la misma. Para su

liquidación se tendrá en cuenta hasta la última semana efectivamente cotizada por este riesgo,” (rayas propias.)

Respecto de la desafiliación del sistema pensional, la SCL de la H. Corte Suprema de Justicia ha precisado que ella en principio se materializa reportado positivamente la novedad del retiro pensional, pero que no es esta la única forma de dar a conocer la intención de desafiliación para entrar a disfrutar de la citada prestación, pues ella se puede deducir de varios hechos, como lo son cesar en el pago de los aportes pensionales cuando ya se ha cumplido los requisitos legales para obtener la pensión y peticionar el reconocimiento de la misma.

En el caso del demandante, a folio 13 en la resolución GNR 357409 de 12 de noviembre de 2015 que le niega la pensión, se anota que solicitó esta prestación el 2 de junio de 2015, sin embargo revisado el reporte de semanas cotizadas que milita folio 88 a 89, el demandante registra 1407,06 semanas cotizadas hasta el 30 de septiembre de 2017, de las que descontadas las cotizadas con posterioridad al 2 de junio de 2015, le quedan cotizadas a esta fecha 1291,77 semanas las que son insuficientes, pues la Ley 797 de 2003 a la que remite el Decreto 2090 de 2003, exigía 1300 semanas cotizadas para acceder a la pensión de vejez, y por ello el actor cuando peticionó la pensión no tenía el número de semanas cotizadas para alcanzar la pensión.

Las 1300 semanas cotizadas el actor las alcanzó entonces en el mes de agosto de 2015, por lo que no puede aducir inducción en error de seguir cotizando, sino desde la fecha que COLPENSIONES le notificó la Resolución que le negaba la pensión, esto es, el 19 de noviembre de 1995, conforme al acta de folio 12, del cartulario y por ello le asiste derecho al disfrute de la pensión desde el 20 noviembre de 1995

A pesar que conforme a la historia laboral obrante a folios 88 y siguientes después 20 noviembre de 1995 el actor continuó cotizando al sistema pensional y hasta el mes de septiembre de 2017, para la Sala es correcta la apreciación del actor en la apelación, sobre la inducción en error por parte de COLPENSIONES, pues incluso para el 12 noviembre de 1995 que se emitió la resolución GNR 357409, el actor ya había alcanzado las 1300 semanas cotizadas.

Conforme a lo anterior se modificará la sentencia de primera instancia en cuanto decidió el pago de la pensión al demandante a partir del 1º de octubre de 2017, para disponer que sea a partir del 20 de noviembre de 2015

En cuento a la excepción de prescripción no resulta probada, teniendo en cuenta que el actor solicitó la pensión el 2 de junio de 2015 y presentó demandada ordinaria laboral el 2 de junio de 2017 sin que hubiese transcurrido el termino de prescripción de 3 años dispuesto por el artículo 151 del CPL y de la SS.

En ilación con lo anterior, el retroactivo pensional que debe reconocer COLPENSIONES a favor del actor entre el 20 de noviembre de 2015 y el 31 de marzo de 2021 corresponde a la suma de \$55.132.560, conforme la siguiente tabla.

RETROACTIVO PENSIONAL				
Año	IPC	# mesadas	Valor pensión (mínimo)	Total Retroactivo (mínimo)
2015	6,77%	2,36	\$ 644.350	\$ 1.520.666
2016	5,75%	13	\$ 689.454	\$ 8.962.902
2017	4,09%	13	\$ 737.717	\$ 9.590.321
2018	3,18%	13	\$ 781.242	\$ 10.156.146
2019	3,80%	13	\$ 828.116	\$ 10.765.508
2020	1,61%	13	\$ 877.803	\$ 11.411.439
2021		3	\$ 908.526	\$ 2.725.578
TOTAL				\$ 55.132.560

Igualmente la sentencia será adicionada en el sentido de disponer expresamente, que el demandante debe aportar el porcentaje legal correspondiente al sistema de salud, desde la fecha en que se causó el derecho a la pensión, conforme lo ha adoctrinado la sala de casación laboral de la H. Corte Suprema de Justicia en reiteradas sentencias, por lo que respecto de las mesadas pensionales retroactivas que se condena a pagar a COLPENSIONES, se descontará el citado aporte al sistema de seguridad social en salud.

En este punto de la sentencia, es necesario manifestar que a pesar que el actor en los alegatos anota que se le otorgue la pensión desde el 1 de noviembre de 2015 y los intereses moratorios contemplados en la ley 100 de 1.993 por el no pago oportuno de la prestación, respecto del asunto referente a los intereses, el apodero de actor nada

expresó al sustentar el recurso de apelación, por lo que no puede ser asunto que se decida en esta instancia, conforme la preceptiva del Art. 66A del CPT y la SS.

Respecto de la indexación, que se condenó a pagar, la misma es procedente, por razones de justicia y equidad, por cuanto con esta lo que se pretende es actualizar la depreciación monetaria causada por el retardado o inoportuno pago de las mesadas pensionales, lo que es justo en una economía inflacionaria como la nuestra. Se precisa que las mesadas pensionales retroactivas que se condena a pagar a COLPENSIONES deberán la indexarse conforme la siguiente fórmula:

$$VA = Vh \times \frac{\text{Índice final}}{\text{Índice inicial}}$$

En la que VA (valor actualizado), es igual a la mesada pensional dejada de percibir por el demandante (Vh), multiplicada por el guarismo que resulta al dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el DANE, vigente en el mes anterior al pago, por el índice inicial, vigente en el mes de causación de cada mesada.

En razón a los argumentos fácticos, probatorias y de derecho expuestos en precedencia, se confirmará el fallo consultado y apelado en cuanto le otorgó la pensión especial de vejez al demandante, modificándolo en lo relativo a la fecha de disfrute de la pensión en la forma expuesta en precedencia y adicionándolo como se explicó, en el tema del aporte al sistema de salud.

Costas en esta instancia a cargo de COLPENSIONES por haber resultado vencida en el recurso de apelación.

Las agencias en derecho conforme al Nral. 3 del Artículo 366 del CGP, las estima el ponente en la suma de \$908.526.

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: **CONFIRMAR** la sentencia del 3 de abril de 2019, proferida por el **JUZGADO DIECISÉIS LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN**, en el proceso ordinario laboral de **ARGEMIRO ECHAVARRÍA LÓPEZ**, contra la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES**, **MODIFICÁNDOLA** en el sentido que el demandante tiene derecho al disfrute de la pensión especial de vejez a partir del 20 de noviembre de 2015, con un retroactivo pensional causado hasta el 31 de marzo de 2021, en la suma de \$55.132.560, conforme al cuadro de la parte motiva de este fallo.

A partir de 1 de abril de 2021, COLPENSIONES continuará pagando al actor una mesada pensional en el monto el salario mínimo legal mensual vigente.

En lo demás se confirma la sentencia apelada y consultada, con la precisión efectuada en la parte motiva, sobre la forma como deben ser indexadas las mesadas pensionales.

SEGUNDO: **ADICIONAR** la sentencia de primera instancia, en el sentido que respecto del monto de las mesadas pensionales retroactivas que se paguen al actor por COLPENSIONES, se descontará el aporte al sistema de seguridad social en salud, en el porcentaje establecido por la Ley.

TERCERO: Costas en esta instancia a cargo de COLPENSIONES. Las agencias en derecho se fijan en la suma de \$908.526.

La anterior sentencia se notifica a las partes en ESTADOS.

Oportunamente devuélvase el expediente al juzgado de origen.

No siendo otro el objeto de esta diligencia se declara culminada, por quienes intervinieron en la decisión, los Magistrados,

FRANCISCO ARANGO TORRES

JOHN JAIRO ACOSTA PÉREZ

JAIME ALBERTO ARISTIZÁBAL GÓMEZ

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE MEDELLÍN – SALA LABORAL -
HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por estados
N ° **073** del **30 DE ABRIL DE 2021**.

consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/125>

Firmado Por:

**FRANCISCO ARANGO TORRES
MAGISTRADO**

MAGISTRADO - TRIBUNAL SUPERIOR SALA LABORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA

**JAIME ALBERTO ARISTIZABAL GOMEZ
MAGISTRADO**

MAGISTRADO - TRIBUNAL SUPERIOR SALA LABORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA

**JOHN JAIRO ACOSTA PEREZ
MAGISTRADO**

MAGISTRADO - TRIBUNAL SUPERIOR SALA LABORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **71fd3b65ad34fb0ca6b429d840ad1173e5a8395ee84a73609aef356f08f5c645**

Documento generado en 29/04/2021 10:27:48 AM